



I

La consulta plantea determinadas cuestiones relacionadas con la aplicación de las normas contenidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, referidas esencialmente al régimen de transferencias internacionales que tendrán lugar como consecuencia de la contratación por sus clientes del producto ..., que implicará la prestación por la consultante de un servicio de computación en nube o “cloud computing”.

En particular, la consulta plantea dos cuestiones concretas relacionadas con la aplicación a los contratos que pudieran celebrarse en el futuro de las cláusulas contractuales tipo aprobadas mediante la Decisión de la Comisión 2010/87/UE, de 5 de febrero de 2010, relativa a las cláusulas contractuales tipo para la transferencia de datos personales a los encargados del tratamiento establecidos en terceros países, de conformidad con la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

La primera de estas cuestiones se refiere a la posibilidad de que sea la propia consultante quien contrate a un tercero independiente de confianza que realice las actividades de auditoría de los sistemas de la entidad importadora (sociedad estadounidense del grupo), con la que se firmaría el correspondiente contrato de transferencia internacional de datos.

La segunda plantea si sería admisible interpretar la cláusula undécima de las contenidas en la mencionada Decisión en el sentido de que la importadora podría firmar con los subcontratistas un único contrato que se refiriese a la totalidad de los servicios que la importadora hubiera ya contratado o pudiera contratar en el futuro.

Igualmente se pone de manifiesto en la consulta cómo determinados aspectos incluidos en la mencionada decisión, y esencialmente los referidos en el Apéndice 1 a las cláusulas no serían realmente aplicables al supuesto de contratación de los servicios de computación en nube a los que se refiere la consulta, por cuanto la entidad prestadora del servicio no tiene interés en conocer ni las categorías de sujetos afectados ni los datos objeto de tratamiento, y menos aún si existen categorías especiales de datos de los previstos en el artículo 8 de la Directiva 95/46/CE, ni las finalidades a las que se destinará el tratamiento efectuado mediante el uso del servicio puesto por la consultante a disposición de sus clientes.

Para dar adecuada respuesta a las cuestiones planteadas por la

consultante es preciso diferenciar varias cuestiones básicas, que habrán de ser objeto de un análisis separado y sucesivo a lo largo del presente informe: así en primer lugar, el informe tratará de dar respuesta a las cuestiones literalmente planteadas en la consulta, en el sentido de si se consideran garantías adecuadas a los efectos de llevar a cabo la transferencia internacional de los datos las planteadas por la consultante para posteriormente plantear si esas soluciones, en cuanto pudieran modificar el modelo estandarizado contenido en la Decisión 2010/87/CE, pudieran seguir permitiendo la realización de transferencias internacionales al amparo de dichas cláusulas, concluyendo, en caso de que ello no sea posible, cómo podrían ajustarse las modificaciones al régimen previsto para las autorizaciones de transferencias internacionales de datos en la Ley Orgánica 15/1999 y su Reglamento de desarrollo.

Asimismo, para dar respuesta a estas cuestiones deberá particularmente tenerse además en cuenta el criterio sustentado por el Grupo creado por el artículo 29 de la Directiva 95/46/CE en su dictamen 5/2012 sobre computación en nube, aprobado el 1 de julio de 2012 (documento WP 196), así como en su documento de preguntas más frecuentes relacionadas con las cláusulas aprobadas por la Decisión 2010/87/UE, adoptado el 12 de julio de 2010 (documento WP176). Dado que no existe una traducción autorizada de los citados documentos la reproducción que en su caso se realice de los mismos se efectuará directamente en lengua inglesa.

II

Dicho todo lo anterior, y en relación con la primera de las cuestiones objeto de la consulta, se plantea si sería admisible interpretar que la facultad de los clientes del servicio de auditar las actividades de tratamiento se entendería colmada satisfactoriamente, si las partes lo acuerdan haciéndolo constar en las cláusulas, mediante la contratación por la consultante de un tercero independiente que llevara a cabo las actividades de auditoría.

Como ya se ha dicho, la primera aproximación a esta cuestión se realizará en el sentido de analizar si el recurso a un tercero independiente contratado por la consultante implicaría la adopción de garantías adecuadas en el marco de la contratación celebrada entre aquella y su cliente, debiendo en este punto ser la respuesta afirmativa siempre que esa tercera entidad gozase de las adecuadas garantías de independencia de la importadora y acreditación de las labores de control llevadas a cabo por la misma.

En efecto, la cuestión planteada ha sido adecuadamente analizada por el Grupo de Trabajo del artículo 29 en el apartado 4.2 de su documento WP196, indicando como consideración general una argumentación que en la práctica resulta coincidente con la planteada en la consulta. En este sentido indica el documento: *“Individual audits of data hosted in a multi-party, virtualised server environment may be impractical technically and can in some instances serve to increase risks to those physical and logical network security controls in place. In such cases, a relevant third party audit chosen by the*



controller may be deemed to satisfy in lieu of an individual controller's right to audit".

Por este motivo, el propio documento clarifica: *"Independent verification or certification by a reputable third party can be a credible means for cloud providers to demonstrate their compliance with their obligations as specified in this Opinion. Such certification would, as a minimum, indicate that data protection controls have been subject to audit or review against a recognised standard meeting the requirements set out in this Opinion by a reputable third party organisation. In the context of cloud computing, potential customers should look to see whether cloud services providers can provide a copy of this third party audit certificate or indeed a copy of the audit report verifying the certification including with respect to the requirements set out in this Opinion"*, añadiendo en nota a pie de página que tales estándares podrían incluir los emitidos por la International Standards Association, la International Auditing and Assurance Standards Boards o la Auditing Standards Board of the American Institute of Certified Public Accountants, en cuanto cubran los estándares a los que se refiere la propia opinión.

Finalmente, el documento establece dos criterios que deberían regir estas auditorías, al indicar:

"The adoption of privacy-specific standards and certifications is central to the establishment of a trustworthy relationship between cloud providers, controllers and data subjects.

These standards and certifications should address technical measures (such as localisation of data or encryption) as well as processes within cloud providers' organisation that guarantee data protection (such as access control policies, access control or backups)."

De este modo, tomando en cuenta los criterios sustentados por el Grupo de Trabajo del artículo 29 sería posible considerar que la auditoría a la que se refiere la consultante, en los términos en los que la misma se señala en la consulta podría ser considerada una garantía adecuada para la transferencia de los datos derivada de la contratación del servicio de computación en nube prestada por la misma siempre y cuando dicho servicio fuera prestado por una entidad enteramente independiente de la consultante y que se encontrase debidamente certificada o acreditada, tanto en lo que se refiere a su independencia como en lo que atañe a sus procedimientos de actuación. Además, sería necesario que las partes conviniesen que la elección de esa tercera parte de confianza se llevase a cabo por parte de la consultante, permitiendo en todo caso al cliente manifestar su opinión así como acceder a los resultados del informe de auditoría que se llevase a cabo, que necesariamente debería reunir los requisitos de contenido a los que acaba de hacerse referencia, en los términos manifestados en el documento WP196 ya citado.

III

En relación con la segunda de las cuestiones planteadas en la consulta, se cuestiona si sería admisible la firma de un único contrato con cada subcontratista, que cubra todas las actividades de tratamiento que el mismo vaya a llevar a cabo respecto de los datos de todos los clientes.

Como se ha dicho, como primera parte del presente análisis nos centraremos en determinar si dicha solución podría considerarse que aporta garantías suficientes desde el punto de vista de la aplicación de las normas de protección de datos de carácter personal.

El artículo 21.2 del reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 dispone lo siguiente:

“No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, será posible la subcontratación sin necesidad de autorización siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que se especifiquen en el contrato los servicios que puedan ser objeto de subcontratación y, si ello fuera posible, la empresa con la que se vaya a subcontratar.

Cuando no se identificase en el contrato la empresa con la que se vaya a subcontratar, será preciso que el encargado del tratamiento comunique al responsable los datos que la identifiquen antes de proceder a la subcontratación.

b) Que el tratamiento de datos de carácter personal por parte del subcontratista se ajuste a las instrucciones del responsable del fichero.

c) Que el encargado del tratamiento y la empresa subcontratista formalicen el contrato, en los términos previstos en el artículo anterior.

En este caso, el subcontratista será considerado encargado del tratamiento, siéndole de aplicación lo previsto en el artículo 20.3 de este Reglamento”

En este mismo sentido, y dentro de las directrices a clientes y proveedores de servicios de computación en nube, contenidas en el documento WP196 del Grupo de Trabajo del artículo 29, al que acaba de hacerse referencia, se hace referencia a las garantías de la subcontratación en los siguientes términos:

“Provisions for subcontractors should be provided for in any contract between the cloud provider and cloud clients. The contract should specify that sub-processors may only be commissioned on the basis of a consent that can be generally given by the controller in line with a clear



duty for the processor to inform the controller of any intended changes in this regard with the controller retaining at all times the possibility to object to such changes or to terminate the contract. There should be a clear obligation of the cloud provider to name all the subcontractors commissioned. The cloud provider should sign a contract with each subcontractor reflecting the stipulations of his contract with the cloud client; the client should ensure that it has contractual recourse possibilities in case of contractual breaches by the provider's subcontractors (see 3.3.2)."

De este modo, siempre que el cliente del servicio de computación en nube pueda tener claro conocimiento de la identidad de los terceros subcontratistas del servicio, así como de las actividades desplegadas por cada uno de ellos, nada obsta a que la citada subcontratación se realice mediante la firma de un único contrato con dichos subcontratistas en que se especifiquen los servicios a prestar.

Ello debería acompañarse de un procedimiento que permitiera a los clientes acceder a los citados datos de identificación y, en el caso de transferencias internacionales de datos o de subcontrataciones posteriores a la citada transferencia, toda vez que se prevé la firma de un contrato directamente entre el cliente y la empresa estadounidense del Grupo, la ubicación geográfica en que se prestará el servicio.

En consecuencia, sería suficiente a efectos de acreditar la existencia de garantías adecuadas que los clientes pudieran acceder, por ejemplo a través de un sitio web al que se hiciera expresa referencia en el contrato firmado con la consultante, a los datos de identificación de los subcontratistas, ubicación de los mismos y servicios de tratamiento que aquéllos desarrollarán, bastando la celebración de un contrato único con tales subcontratistas que, lógicamente cumpliera con los requisitos necesarios para que cupiera atribuir a los mismos la condición de subencargados del tratamiento o para adoptar garantías suficientes en caso de transferencia ulterior de los datos.

Por tanto, cabe concluir esta primera parte del presente informe indicando que las soluciones planteadas por la consultante podrían ser consideradas por esta Agencia como suficientes para aportar las adecuadas garantías exigibles en la prestación de estos servicios, siempre que se tengan en cuenta las consideraciones que se han efectuado a lo largo tanto del presente apartado como del anterior.

IV

Alcanzada la conclusión anterior, que debe ser especialmente tenida en cuenta para lo que se irá señalando posteriormente, debe ahora analizarse, siguiendo también el planteamiento de la consulta, si la alteración de las

cláusulas contenidas en la Decisión 2010/87/UE llevada a cabo como consecuencia de dicha conclusión permitiría considerar que las garantías aportadas para las transferencias internacionales de datos derivadas de la contratación del servicio de computación en nube prestado por la consultante puede entenderse cubiertas por la mencionada Decisión; es decir, si el hecho de modificar el tenor de las cláusulas altera la posibilidad de entender que efectivamente se está acudiendo a las mismas como garantía de la transferencia internacional de datos.

Pues bien, a diferencia de la respuesta dada a las cuestiones analizadas en primer lugar, la conclusión alcanzada en este segundo punto, ha de ser negativa, dado que la transferencia que se efectuase al amparo de las cláusulas resultantes de la modificación planteada no podría considerarse fundada en el modelo estandarizado adoptado por la Comisión.

El artículo 1 de la Decisión 2010/87/UE dispone que “Se considera que las cláusulas contractuales tipo incluidas en el anexo ofrecen las garantías adecuadas con respecto a la protección de la vida privada y de los derechos y libertades fundamentales de las personas, así como respecto al ejercicio de los correspondientes derechos, según exige el artículo 26, apartado 2, de la Directiva 95/46/CE”. Asimismo, el primer inciso del primer párrafo del artículo 2 añade que “La presente Decisión aborda únicamente la adecuación de la protección otorgada por las cláusulas contractuales tipo establecidas en el anexo para la transferencia de datos personales a los encargados del tratamiento”.

Quiere ello decir que el acto de la Comisión en que consiste la Decisión implica considerar adecuadas las transferencias basadas en las concretas garantías aportadas por las cláusulas concretas y estandarizadas incorporadas a la misma, sin que una modificación en las cláusulas pueda implicar entender que las mismas siguen ajustándose a los estándares adoptados por la Comisión.

Y, en particular, las modificaciones derivadas de las cuestiones que han sido analizadas en el presente informe suponen una desviación respecto del modelo tipo efectivamente aprobado, sin perjuicio de que como se ha analizado en los apartados II y III las garantías que dichas cláusulas implican pudieran considerarse suficientes a los efectos previstos en la normativa de protección de datos de carácter personal.

En efecto, en cuanto a la primera de las cuestiones, como la propia consultante pone de manifiesto en su consulta, el modelo estandarizado aprobado por la Comisión resulta tajante en la determinación de que deberá ser el importador responsable del tratamiento quien decida qué tercera entidad llevará a cabo la auditoría de los sistemas de la importadora encargada del tratamiento.

Así, la cláusula 5 f) señala taxativamente que el importador “ofrecerá a petición del exportador de datos sus instalaciones de tratamiento de datos para que se lleve a cabo la auditoría de las actividades de tratamiento cubiertas por



las cláusulas”, especificando de forma terminante que dicha auditoría “será realizada por el exportador de datos o por un organismo de inspección, compuesto por miembros independientes con las cualificaciones profesionales necesarias y sujetos a la confidencialidad, seleccionado por el exportador de datos”. Todo ello, sin perjuicio de la competencia que corresponde a la autoridad de control del exportador, a la que también se refiere la cláusula

Del mismo modo, en cuanto al cumplimiento de las exigencias derivadas de la terminación del contrato, la cláusula 12.2 señala que “el importador de datos y el subencargado garantizan que, a petición del exportador o de la autoridad de control, pondrá a disposición sus instalaciones de tratamiento de los datos para que se lleve a cabo la auditoría de las medidas mencionadas en el apartado 1”.

En este sentido, resulta relevante que el propio documento WP 196, sin perjuicio de considerar adecuadas las garantías derivadas de una auditoría llevada a cabo por el tercero certificado de confianza que hubiera elegido el importador, señale en el apartado 4.1. *“the client should request logging of processing operations performed by the provider and its sub-contractors; the client should be empowered to audit such processing operations, however third-party audits chosen by the controller and certification may also be acceptable providing full transparency is guaranteed”*.

En cuanto a la segunda de las cuestiones a las que se refiere la consulta, la cláusula undécima del modelo estandarizado establecido en la Decisión 2010/87/UE también resulta clara, al establece en su primer apartado que “El importador de datos no subcontratará ninguna de sus operaciones de procesamiento llevadas a cabo en nombre del exportador de datos con arreglo a las cláusulas sin previo consentimiento por escrito del exportador de datos. Si el importador de datos subcontrata sus obligaciones con arreglo a las cláusulas, con el consentimiento del exportador de datos, lo hará exclusivamente mediante un acuerdo escrito con el subencargado del tratamiento de datos, en el que se le impongan a este las mismas obligaciones impuestas al importador de datos con arreglo a las cláusulas (1). En los casos en que el subencargado del tratamiento de datos no pueda cumplir sus obligaciones de protección de los datos con arreglo a dicho acuerdo escrito, el importador de datos seguirá siendo plenamente responsable frente al exportador de datos del cumplimiento de las obligaciones del subencargado del tratamiento de datos con arreglo a dicho acuerdo”.

En este sentido, el documento WP176 del Grupo de Trabajo del artículo 29, como pone de manifiesto la propia consultante, resulta igualmente terminante en el sentido de que la firma de un único contrato no sería posible en el contexto de las cláusulas aprobadas por la Decisión 2010/87/UE, sin perjuicio de que la firma de un único protocolo de subcontratación pudiera ser posible y aportar garantías adecuadas, pero indicando que tales garantías ya diferirán de las previstas en las cláusulas. Así, ante la pregunta de si tal opción

sería posible, el documento señala lo siguiente:

“No. It is not possible to sign just one contract for all. Appendix 1 to the contract will always be different since the identity of the data exporter will vary and probably also the categories of data, the data subjects, and the description of the processing operation.

Nevertheless, parties may decide to sign each contract making a reference to more generic agreements , such as the content of Model Clauses 2010/87/EU and possibly its Appendix 2 relating to technical measures (if they are the same for the different contracts and if they are accepted by the data importer and meet the data exporters’ requirements).”

Por tanto, nuevamente, sin que ello suponga valorar negativamente las garantías derivadas de las opciones planteadas por la consultante, el Grupo concluye que dichas garantías no podrán considerarse como englobadas por la Decisión 2010/87/UE, no pudiendo ya considerarse las cláusulas aportadas como “estándares” a los efectos previstos en el artículo 1 de la citada Decisión

V

Ello conduce a la tercera parte del análisis que se anticipó en el apartado I del presente informe: las garantías previstas por la consultante en su escrito podrían ser consideradas adecuadas conforme a la normativa de protección de datos de carácter personal para que pudiera llevarse a cabo la transferencia internacional de datos, pero no coincidiendo con las adoptadas por la Comisión no cabría ya amparar la autorización de la transferencia internacional de datos en la Decisión 2010/87/UE, siendo necesario resolver cuál habría de ser la solución a adoptar en el presente caso.

Como punto de partida, cabe recordar que el apartado 5 del Preámbulo de la Decisión 2010/87/UE señala que “la presente Decisión debe entenderse sin perjuicio de las autorizaciones nacionales que puedan conceder los Estados miembros de conformidad con las disposiciones nacionales de aplicación del artículo 26, apartado 2, de la Directiva 95/46/CE. La presente Decisión tendrá como efecto únicamente exigir a los Estados miembros que no se nieguen a reconocer que las cláusulas contractuales tipo establecidas en ella proporcionan las garantías adecuadas, por lo que no afectará de ninguna manera a otras cláusulas contractuales”, y el apartado 14 añade que “resulta oportuno establecer los detalles mínimos que deberán especificar las partes en el contrato sobre la transferencia. Los Estados miembros deben conservar la capacidad de adaptar la información exigida a las partes. El funcionamiento de la presente Decisión será revisado a la luz de la experiencia adquirida”.

De ello se desprende que las autoridades nacionales de protección de datos podrán determinar conforme a las normas que en su derecho interno transpongan el artículo 26.2 de la Directiva si una determinada transferencia internacional de datos reúne las garantías suficientes para que la misma pueda



tener lugar aun cuando dichas garantías no coincidan con las derivadas de los formatos adoptados expresamente por la Comisión en ejercicio de las competencias expresamente previstas en la Directiva.

En este sentido, el artículo 70.2 del reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que la autorización para la transferencia internacional de datos a la que se refieren los artículos 33.1 de la Ley y 70.1 del propio reglamento “podrá ser otorgada en caso de que el responsable del fichero o tratamiento aporte un contrato escrito, celebrado entre el exportador y el importador, en el que consten las necesarias garantías de respeto a la protección de la vida privada de los afectados y a sus derechos y libertades fundamentales y se garantice el ejercicio de sus respectivos derechos”. Esta previsión se completa con un segundo párrafo en que se señala que “a tal efecto, se considerará que establecen las adecuadas garantías los contratos que se celebren de acuerdo con lo previsto en las Decisiones de la Comisión Europea 2001/497/CE, de 15 de Junio de 2001, 2002/16/CE, de 27 de diciembre de 2001, y 2004/915/CE, de 27 de diciembre de 2004 o de lo que dispongan las Decisiones de la Comisión que den cumplimiento a lo establecido en el artículo 26.4 de la Directiva 95/46/CE”.

Es decir, el reglamento indica que se consideran adecuadas las garantías contenidas en las cláusulas aprobadas por la Comisión, pero que ello no implica que sean las únicas que quepa aportar para garantizar la existencia de las garantías adecuadas exigidas por la Ley.

Al propio tiempo, y también como cuestión que resulta especialmente relevante en el presente supuesto, la simple adopción de las cláusulas estandarizadas previstas en la decisión 2010/87/CE, que como se ha señalado no pueden constituir un modelo idéntico en todos los casos, sino que exigen la inclusión de una serie de especificaciones concretas en su Apéndice 1, ajustadas a las concretas operaciones objeto de transferencia, con indicación de extremos tales como la categorías de sujetos afectados, los datos objeto de transferencia o la existencia de datos especialmente protegidos, implican necesariamente el sometimiento del modelo de garantías a una decisión individualizada de esta Agencia para cada supuesto concreto de transferencia, sin que sea posible la autorización de un modelo estandarizado que pudiera cubrir la totalidad de los servicios objeto de transferencia como consecuencia de la contratación por cualquier cliente de los servicios de contratación en nube ofrecidos por la consultante.

En consecuencia, la mera aplicación de las cláusulas de la decisión 2010/87/UE en los contratos celebrados por la consultante con sus clientes implicaría, siguiendo el ejemplo que la misma incluye en su consulta, la tramitación de tantos expedientes de autorización de transferencia internacional de datos como contratos llegasen a celebrarse; es decir, como clientes tiene la compañía, lo que implicaría una alta carga no sólo para la consultante, sino para con esos clientes y para esta Agencia Española de Protección de Datos,

si se pretende, tal y como se indica, que la cifra de clientes sea millonaria.

En este punto, debe traerse nuevamente a colación lo dispuesto en el artículo 70.2 del Reglamento, especificando el artículo 70.1 del mismo que “Cuando la transferencia tenga por destino un Estado respecto del que no se haya declarado por la Comisión Europea o no se haya considerado por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos que existe un nivel adecuado de protección, será necesario recabar la autorización del Director de la Agencia Española de Protección de Datos”.

Pues bien, si la consultante adoptase unas cláusulas estandarizadas que aun difiriendo de las contenidas en la Decisión 2010/87/CE contuviesen las garantías adecuadas de protección de los derechos de los afectados y, en particular, de su derecho fundamental a la protección de datos, aun no incluyendo previsiones tales como las relativas a la totalidad de los detalles exigido por el Apéndice 1 de las cláusulas o introduciendo modificaciones en el tenor de algunas de las cláusulas, como las que se derivarían de las cláusulas 5 f), 11 y 12, en los términos ya vistos, sería posible que por parte de esta Agencia se dictase una resolución determinando que las garantías contenidas en las citadas cláusulas deben considerarse adecuadas a los efectos previstos en el artículo 33.1 de la Ley Orgánica 15/1999, lo que implicaría una autorización automática de cualquier transferencia internacional realizada al amparo de tales cláusulas en tanto no se produjera ninguna alteración de las mismas.

De este modo, los clientes únicamente tendrían que notificar, en su caso, la modificación del fichero cuyos datos fueran objeto de transferencia como consecuencia de la contratación del servicio de computación en nube ofrecido por la consultante, refiriéndose precisamente a la resolución de la Agencia que hubiera autorizado expresamente las citadas transferencias, pero sin ser preciso que cada uno de ellos solicitase de forma individualizada la autorización del Director de la Agencia.

Por ello, teniendo en cuenta lo que acaba de indicarse, puede considerarse que la solución derivada de la no aplicación de las cláusulas contenidas en la Decisión 2010/87/UE, que por otra parte no parece posible a la vista de las modificaciones que exige su adaptación al modelo derivado de la computación en nube, lejos de implicar un perjuicio o una carga a la consultante o sus clientes, liberarían a éstos últimos de la necesidad de recabar separadamente la autorización del director de la Agencia para la transferencia internacional de datos, algo que sí sería exigible de seguirse el modelo aprobado por la Decisión, al ser preciso analizar las circunstancias que concurrirían en cada supuesto de transferencia internacional.

VI

A la vista de todo lo que se ha venido indicando, cabría concluir lo siguiente:



- Las modificaciones planteadas en el modelo establecido por la Decisión 2010/87/UE impedirían entender las cláusulas resultantes como amparadas en el citado modelo.
- No obstante, las garantías a las que se refiere la consultante en relación con las citadas modificaciones podrían considerarse adecuadas para amparar una transferencia internacional de datos derivada de la contratación de los servicios de computación en nube que la misma presta, siempre que se tengan en cuenta las consideraciones a las que se refieren los apartados II y III de este informe.
- Sería posible que la consultante solicitase del Director de la Agencia la adopción de una Resolución de autorización de transferencia internacional de datos de carácter personal sobre la base de las garantías derivadas de las citadas modificaciones, que se tramitaría conforme a las normas previstas en el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, pudiendo en su caso resolverse que las transferencias amparadas en esas nuevas cláusulas tipo aportan suficientes garantías.
- De adoptarse tal resolución, las empresas clientes no precisarían solicitar la autorización singular de las transferencias derivadas de la contratación de los servicios de computación en nube, bastando que notificasen, en su caso, la correspondiente modificación del fichero, con referencia a la resolución que se hubiera dictado.